



Memoria de la sesión binacional de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), martes 16 de marzo de 2021

I. Perspectivas. Biden y América Latina: desafíos y oportunidades.

Intervención de un representante del Programa Peter D. Bell de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. La forma como la administración de Biden ve a América Latina, y por consiguiente a Colombia y Venezuela, se puede resumir en tres ideas.

1. Biden tiene una elevada priorización en la región. Entiende de manera diferenciada la relación con América Latina, y posee un equipo que la conoce. Esta priorización tiene, sin embargo, dos matices: el primero de ellos referente a la situación en el hemisferio, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia, en temas salud pública y económicos; el segundo, referido al proceso de debilitamiento institucional, de polarización y fragmentación en socios atractivos para EEUU. Por estos motivos, las expectativas de la Biden podrán ser más moderadas y cautelosas, sin grandes planes o visiones a futuro. El segundo matiz, indica que es muy temprano aún en el período presidencial para analizar la situación, pues los primeros esfuerzos hacia la región se enfocaran en Centroamérica y el creciente flujo migratorio.

2. Los pilares de la política exterior de EEUU, que se aplican en América Latina: a) énfasis en el multilateralismo, volver a fortalecer alianzas con socios tradicionales y regresar al Acuerdo de París, a la OMS, al Consenso de DDHH de la ONU, y a la participación en cumbres mundiales sobre democracia y cambio climático; b) énfasis en el cambio climático, situándolo en el primer nivel de la política exterior, considerándolo una amenaza existencial lo cual puede tener implicaciones en las relaciones con países como México, Brasil y Colombia; c) democracia, DDHH y anticorrupción, asegurando su compromiso en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil, Colombia, etc. (países que tienen más afinidad ideológica con Washington, pero que serán objeto de escrutinio en este tema); y d) mayor vinculación de la política exterior con temas de política doméstica, temas comerciales y reflexiones sobre las relaciones de raza y étnica en EEUU.

3. El impacto, en la vida nacional de los EEUU, de la política exterior hacia América Latina desde dos perspectivas: primero, de la demografía, por el poder político de ciertas diásporas (como la cubana, colombiana o venezolana); y segundo, de la migración desde Centro América. La administración Biden heredó una crisis humanitaria ocasionada por las políticas migratorias de Trump, por lo que está tratando de reestablecer la institucionalidad, en medio de una gran demanda de migración desde Centroamérica (por los huracanes, la pandemia, etc.).

Los tres puntos anteriores sirven de preámbulo para las relaciones con Colombia y Venezuela, donde se espera una evolución más que una revolución. En el caso colombiano, se prevé una agenda más integral entre ambos países, enfocada en democracia, pandemia, implementación del Acuerdo de Paz, cambio climático, migración desde Venezuela, DDHH, y narcotráfico. Siendo senador Joe Biden estuvo involucrado en los inicios del Plan Colombia, y como vicepresidente apoyó la negociación entre el gobierno de Santos y las FARC, lo cual implica conocimiento de la situación política del país. El anuncio del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos – ETP fue muy bien recibido en Washington, y fue seguido por una política similar en los EEUU pocas semanas después con el Estatuto de Protección Temporal o TPS, por sus siglas en inglés. Para Venezuela, no se verán cambios radicales o soluciones fáciles. La estrategia de la administración Biden será cautelosa, marcada por seis líneas: la primera, una claridad absoluta de la naturaleza dictatorial del régimen, vinculado a sanciones individuales, denuncias de violación de DDHH y el reconocimiento del gobierno interino de Guaidó; la segunda, un mayor valor a la situación humanitaria y al estatus de protección a venezolanos en los EEUU; la tercera, el enfoque en una estrategia bilateral y de asociación con otros actores, como la Unión Europea o el Grupo de Contacto; la cuarta, una estrategia diplomática enfocada a la búsqueda de una salida negociada que pueda finalizar en elecciones libres en Venezuela, en la cual las sanciones económicas o de otro tipo son consideradas

herramientas útiles, pero deben servir para una estrategia más amplia, orientadas y revisadas para saber que están contribuyendo a este fin estratégico; la quinta, poner a los actores venezolanos al frente de las negociaciones donde EEUU pueda apoyar, pero que el liderazgo sea asumido por los propios venezolanos; y la sexta, un creciente reconocimiento de la multiplicidad de actores comprometidos con la democracia y el bienestar en Venezuela como universidades, gremios, Iglesia, sociedad civil o el Foro Cívico. Se subraya la importancia y los esfuerzos de estas voces. Estos últimos puntos, se alinean con las metas de PCCV.

Daniel García Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de la organización Planeta Paz realizó comentarios al respecto de la intervención de Camilleri. Resaltó la diferencia y el contraste al inicio del 2021 entre la administración Trump y la de Biden. Hace cuatro años hubo un desplazamiento de la ideología en la región, determinado por las relaciones políticas e ideológicas con EEUU. Por esto, la derrota de Trump ha significado para la derecha latinoamericana la pérdida de su aliado principal. Se espera un retorno al multilateralismo, a la diplomacia y a los mecanismos bilaterales que marcarán un tiempo distinto. Por supuesto, no se verán grandes cambios de un día para otro, pero estos nuevos matices tendrán un gran impacto para la región, lo que facilitará que, a mediano y largo plazo, se puedan reconfigurar nuevas relaciones y nuevos ejes de trabajo entre EEUU y América Latina. En concordancia con la presentación de Camilleri, pequeños matices en la política exterior pueden tener grandes repercusiones. En el caso colombiano, que EEUU respalde el Acuerdo de Paz y a la JEP será significativo, y podría generar cambios para Colombia. Así mismo, en temas relacionados al narcotráfico, el presidente Biden conoce al país, particularmente en tema de cultivos ilícitos y de fumigaciones (relacionados con los acuerdos de paz). Los DDHH vuelven a tomar un papel protagónico, que se había perdido en los años recientes, especialmente frente al asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Para Venezuela, el énfasis en las relaciones diplomáticas y en las acciones multilaterales permite el acercamiento a actores como la Unión Europea o al Grupo de Contacto, lo que posibilita distintas salidas a la crisis. También, que la Biden reconozca la importancia del tema humanitario y de la migración, abrirá canales entre Venezuela y Colombia. Finalmente, no se puede esperar que EEUU haga el trabajo por América Latina, los nuevos espacios deben ser aprovechados por la sociedad civil.

Debate

- Sobre Venezuela. ¿Habrá suficiente presión a corto o mediano plazo para que Maduro conciba un ambiente de negociación bilateral serio?

- En Venezuela tenemos la percepción de que el gobierno está atornillado y no tiene ninguna intención de aflojar el poder. Entonces, ¿cómo se dialogará con un gobierno que no quiere elecciones, rechaza ideas distintas, persigue todo tipo de oposición, niega la información y manipula hasta la pandemia?

MC. El gobierno de Trump vendió una fantasía con mucha efectividad: soluciones fáciles para tumbar al gobierno de Maduro. Eso siempre fue una fantasía, no estuvo sobre la mesa, pero fue vendido por altos funcionarios de la administración de Trump. Esto no se verá en el gobierno de Biden. El gobierno de Biden entiende la dificultad de la situación en Venezuela. Maduro tiene sus debilidades, pero está atrincherado en el poder. La única manera de volver a un camino democrático en Venezuela es a través de una estrategia sostenida en el tiempo que tenga dos frentes: a) presión internacional y sanciones; y b) movilización y construcción de un movimiento democrático de resistencia dentro del país. La presión internacional por sí sola nunca será suficiente, para el cambio o para crear un ambiente en el que Maduro se sienta a negociar en serio.

- ¿Cree que hay alguna esperanza de que eliminen o no aumenten las sanciones genéricas, que no afectan a quienes tienen el poder sino a la población? En caso afirmativo, ¿qué cree que puede hacer la sociedad civil frente a Biden en esa dirección?

- ¿Estados Unidos apoyaría a Colombia en el proceso de regularización de migrantes venezolanos?

- ¿Piensa que hay algo que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer para tener una mayor influencia en Washington, sobre la política de EEUU frente a Venezuela?

MC. Sobre sanciones. Habrá ajustes, pero no cambiarán mucho. Hay una conciencia que debe haber un costo beneficio: en términos de presión política, las sanciones tienen que justificar cualquier impacto en la sociedad civil, especialmente teniendo en cuenta la situación humanitaria. La administración Biden es sensible al análisis frente a las sanciones (globalmente). Hay dos realidades: a) la sensación que las sanciones representan una presión efectiva frente al régimen y, en un momento en que la oposición venezolana está débil, se espera que una de las pocas fuentes de presión sean las sanciones; y b) la realidad política también influye en este punto. ¿Dónde podemos ver ajustes? en sanciones sobre el diésel, con gran impacto humanitario y donde el beneficio de estas sanciones nunca fue claro. ¿Qué puede hacer la sociedad civil venezolana? seguir haciendo parte de la discusión en Washington, participar en esos espacios le otorga credibilidad. Es importante también la intervención frente al gobierno de Guaidó, que será escuchado. Biden no querrá tomar ningún paso frente a las sanciones si no está acompañado del gobierno interino de Guaidó. En el caso de Colombia y la migración venezolana, en temas económicos, la administración ha destinado de manera generosa recursos para ayudar y probablemente aumentarán.

- ¿Por qué los EEUU, a diferencia de la Unión Europea, reconoce a Guaidó? teniendo en cuenta que gran parte de la sociedad venezolana no se siente representada.

MC. No hay una alternativa clara y el gobierno de Biden reconoce que la crisis política no tiene una solución fácil. Si EEUU desiste de reconocer a Guaidó, debe haber una alternativa, que requiere una inversión de capital diplomático y humano grande. Por lo tanto, es más sensato seguir reconociendo a Guaidó. Con una estrategia de sentarse a negociar, debe tenerse un interlocutor, y para ello el actor más legítimo sigue siendo la Asamblea Nacional de 2015 y su presidente Guaidó. En ausencia de alternativas, es la opción democrática más clara.

- ¿Cómo será la relación del gobierno de Biden con Colombia, especialmente frente a Venezuela?

- En términos internos de Venezuela, se necesita una fuerte presión social desde la oposición, ¿los EEUU, la Unión Europea y el grupo de Lima pueden ayudar en una estrategia unitaria de oposición?

- En Venezuela se siente que la oposición está debilitada y que la acción internacional no parece suficiente, ¿cómo se puede presionar más?

MC. Colombia en Washington, el tema de Venezuela siempre estará sobre la mesa. Washington siempre escuchará la visión colombiana (la más relevante en América Latina), pero Biden mantendrá su propia postura. Si Duque y su gobierno continúan en la posición que no puede haber negociaciones pacíficas en Venezuela, esto no cambiará la posición del gobierno de Biden. Sobre la oposición, hay un papel que puede jugar EEUU en tratar de incentivar, e incluso presionar, para la unidad de la oposición venezolana, pero no es claro cómo lo hará el gobierno. Hay un deseo de obligar de alguna manera a que los actores venezolanos asuman más protagonismo y dejen de mirar a Washington para que decida la ruta a seguir. Eso debe ser un trabajo interno de la oposición. Las sanciones unilaterales no funcionan, no hay evidencia en la historia. Se está pensando en una estrategia de presión multilateral, parecida a la que se tuvo con Irán en años anteriores. Sobre Cuba: habrá ajustes, pero serán menores comparados con las políticas de Obama. Si no hay mayor movimiento desde Cuba, no habrá una apertura plena, como lo hubo en el gobierno de Barack Obama.

II. Diálogo con redes, entidades y organizaciones.

La segunda parte de la sesión abordó la problemática ambiental en la Serranía del Perijá, específicamente del complejo de páramos compartido en la zona fronteriza, entre los departamentos de Cesar y Guajira, en Colombia, y el estado Zulia, en Venezuela. Esta región es habitada por poblaciones indígenas importantes como los Motilón-Barí y los Yukpa, así como por poblaciones campesinas.

Wilson Márquez Daza, profesional especializado de la subdirección general del área de gestión ambiental de la Corporación Autónoma del César – Corpocesar. responsable de los proyectos de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. El complejo de páramos del Perijá es una zona de gran importancia por su diversidad ecológica y sus recursos hídricos, la cual pide mayor atención de las autoridades. Este complejo forma un corredor ecológico y continuo de 28.994 hectáreas de páramos secos, del lado colombiano, que posee el 50% de las especies endémicas de la zona. Así mismo, los páramos surten de agua a más de 150.000 personas y tienen una condición fronteriza de bisagra con Venezuela. En el 2007, la Universidad Nacional de Colombia realizó los primeros estudios que sugirieron volver estos páramos zona de conservación. En el 2008, hicieron las primeras propuestas de ordenamiento territorial entre los departamentos de Cesar y Guajira, que consideraron los páramos como zona de protección. Entre 2017 y 2018, el gobierno nacional delimitó las zonas de páramos en el país, en las cuales incluyeron los páramos del Perijá. Corpocesar ha insistido en más apoyo institucional, de las alcaldías, gobernaciones y de las corporaciones autónomas regionales, así como en vincular a las comunidades en procesos de organización comunitaria para proteger la zona por conflictos producto de ganadería esporádica (69,4%), agricultura y ganadería con pastoreo semi intensivo (22,6%) y por la preparación para cultivos y renovación de pasturas (8%) . Es una zona de gran interés para la región, que requiere articulación de ambos lados de la frontera, para proteger el ecosistema y especies endémicas, como el oso de anteojos.

Daniel Morón, director de la fundación Trabajando Juntos, en el municipio de La Paz, Cesar, sobre la recuperación del páramo de Sabana Rubia. La iniciativa de trabajar por el páramo surgió en 2020 debido a un incendio que quemó 5.200 hectáreas de páramo. Este grave problema ambiental, que inició desde el lado venezolano de la frontera, afectó los municipios de Codazzi y La Paz, en el Cesar. Desde la Universidad Nacional se realizó un diagnóstico y trabajo social con el fin de involucrar a la comunidad para que sea la protagonista en la recuperación del páramo, a través de un análisis detallado de las zonas críticas afectadas. Entre las estrategias para la recuperación organizó un vivero de frailejones, en un intento de reforestación, que ha aprovechado el trabajo comunitario con prácticas y experiencia de los pobladores de la zona. La fundación Trabajando Juntos ha avanzado en la alianza con Universidad Nacional para sacar el proyecto adelante. Esto ha sido mostrado como un ejemplo para replicar en otras zonas de protección del país, que involucre a las comunidades.

Debate

- Hay un conflicto interétnico por el territorio entre población Yukpa y campesinos, ¿cómo aprovechar este espacio para poder discutir con mayor detalle este asunto? Ha habido intentos de acercamiento entre ambas partes con apoyo de la Comisión de la Verdad. Este esfuerzo requiere continuidad y vincular a la discusión la población, tanto campesina como Yukpa en Venezuela. Es un tema que merece pensarlo binacionalmente.

DM. A raíz del problema socioeconómico y político en Venezuela, muchos indígenas Yukpa se han trasladado al lado colombiano, y se han asentado en la región. Hay un conflicto por el territorio, especialmente entre indígenas y campesinos. Ha habido intermediarios como instituciones educativas y la iglesia para lograr acuerdos de respeto a los territorios. En el fondo se debe aprender a convivir.

WM. Los incendios han sido puntos de quiebre en la tensión entre indígenas y campesinos, una parte culpa a la otra y viceversa. El gobierno nacional tiene el deber de delimitar el territorio ancestral de los indígenas. Pese a lo anterior, el tema de conservación ambiental es de interés mutuo entre ambos grupos y favorece el diálogo.

- ¿Cómo es posible que, en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Barranca que están denominados como Distritos de Manejo Integral Perijá, y que poseen zonas de protección, se piense explotar una mina de carbón a cielo abierto de la multinacional Best Coal Company? Dicha mina está a menos de 800 metros de la comunidad de Cañaverales y de una zona de reserva protectora donde se han identificado especies endémicas.

WM. Las áreas se declaran protegidas para blindarlas de actividades nocivas como la minería y actividades agropecuarias. Sin embargo, no es fácil hacer los controles en las zona. Las comunidades son quienes deben ejercer vigilancia y veeduría para presionar.

- ¿Hay algún mecanismo supranacional que permita a las comunidades en Colombia y Venezuela formular un plan conjunto de manejo? independientemente de la falta de canales diplomáticos entre los dos Estados.

- ¿Cómo generar en medio de falta de relaciones diplomáticas, algún mecanismo supranacional que permita a los pobladores de ambos lados de la frontera coordinar acciones concretas para defender las áreas protegidas?

DM. La Universidad Nacional está trabajando el tema de participación de las comunidades Yukpa en el Cesar. Con los campesinos se ha trabajado la problemática sobre tierras. Se está dialogando sobre el trabajo de la mesa étnica. Se debe apuntar a un plan operativo para que las zonas protegidas puedan trabajar en conjunto. Las universidades tienen un rol importante, que deben liderar. Para vincular actores institucionales, organizaciones indígenas y campesinas (muchas de las cuales tienen condición binacional).